

matrimonio civil con tercera persona, teniendo el juez que tener presente no ya exclusivamente el tema de la existencia o no de falta de consentimiento, sino también el problema pastoral implicado en esa situación.

A diferencia de lo que cabría esperar, el autor en sus reflexiones críticas acerca de la simulación es más bien restrictivo respecto a la admisión de capítulos de nulidad. Así, por ejemplo, en la pág. 100 afirma que la simulación contraria a la absoluta indisolubilidad del matrimonio que no conlleva al mismo tiempo una actitud contraria al carácter duradero del matrimonio —como en el matrimonio a prueba o por un tiempo— no es constitutivo de capítulo de nulidad.

Respecto a la intención contraria a la prole (pág. 104), entiende que la intención contraria a la prole en cuanto tal no constituye un capítulo de nulidad nada más que por Derecho positivo eclesiástico, y aun así re-

sulta dudoso que exista tal precepto positivo. No dejan de sorprender posturas como las indicadas.

Meinrand Limbeck, en cambio, no se sitúa en las perspectivas de la doctrina canónica ni de la praxis de los tribunales, que no toma en consideración, sino que entra a analizar la disolubilidad del matrimonio rato y consumado, a partir de los textos bíblicos: Gen. 2, 18; Matth. 22, 34-40; Marc. 12, 28-14; Eph. 5, 22-33. Los manuscritos del Qumram y otras erudiciones bíblicas son los que fundamentan su línea de argumentación. Haciendo hincapié en que el amor a Dios y al prójimo es el resumen de la ley y los profetas y de que Dios quiere antes que nada la misericordia y no el sacrificio, parece concluir que el principio de la indisolubilidad del matrimonio no puede conducir a situaciones inhumanas.

JOSÉ M. GONZÁLEZ DEL VALLE

MARÍA LUISA JORDÁN, *Mala fe y acción de nulidad en el matrimonio canónico*, Ediciones Universidad de Navarra, S. A. Pamplona 1985, 256 págs.

Con una Introducción General (pp. 17-27), comienza María Luisa Jordán su estudio, planteando ya, de entrada, cuál sea el estado de la cuestión. Esta reside en la restricción impuesta por el c. 1971, n.º 1.º del Código de Derecho canónico de 1917, al cónyuge que fue causante del impedimento que hizo nulo el matrimonio, para ejercer el *ius accusandi* que el propio precepto canónico a favor de los cónyuges reconoce. Cuestión ésta que, como la propia autora señala, ha

sido ya superada por el nuevo Código de SS. Juan Pablo II, en su c. 1674. Por consiguiente, cabe decir que nos hallamos en presencia de un trabajo cuyo contenido fundamentalmente es de naturaleza histórica. Sin embargo, no deja de latir constantemente, a lo largo de toda esa investigación y exposición de naturaleza histórica, una cuestión jurídico-sustancial de carácter permanente, a saber, en qué medida un sujeto que obra dolosamente, hasta hacer nulo el negocio originado,

puede luego servirse de su propia conducta fraudulenta pasada, para obtener la nulidad de dicho negocio.

La autora, en el cap. II, pp. 29-126, al que designa bajo la rúbrica «La Doctrina Histórica», al mismo tiempo que nos ilustra del origen penal romano de la acusación en nulidad del matrimonio, prosigue su estudio en el Decreto de Burcardo de Worms y en el de Ivo de Chartres, para continuar con el Decreto de Graciano y demás fuentes del *ius antiquum*; de este modo va, al mismo tiempo, ilustrando acerca de ciertos principios que juegan de modo permanente, aunque alguna vez sufran algún eclipse, en el derecho matrimonial canónico. Estos principios pueden reducirse a los siguientes: protección al cónyuge de buena fe, sanción a la mala fe, el principio de libertad consensual para contraer, la presunción del consentimiento perseverante, la no existencia en el régimen canónico del matrimonio de las nulidades relativas contractuales.

La autora muestra el juego de esos principios en la doctrina de los autores del *ius vetus*, centrándose fundamentalmente en el principio Alejandro, que es a su vez el que centra el trabajo: nadie puede obtener provecho de su propio dolo.

Esa investigación histórica no se reduce, pues, a una recogida y exposición de textos, sino que se adentra en los problemas que esos textos suscitan, tras una descripción muy detenida de los supuestos de hecho, de una casuística que va dando origen a la doctrina de los pontífices y de los canonistas antiguos. Se advierte, en ese análisis y consideración detenida de esta doctrina, cómo se intenta ofrecer soluciones justas a cada caso concreto planteado, pero a su vez esa as-

piración de justicia, en ocasiones por el deseo de imponer un rigor sancionador a las conductas irregulares, ha conducido a negar la libertad consensual para contraer el matrimonio, obligando a contraerlo al autor de la coacción o del engaño; otras veces, al negársele al cónyuge doloso el *ius accusandi*, ha podido llegarse a un tratamiento de la nulidad matrimonial —que es siempre absoluta— muy parecido al de las nulidades relativas. Me parece que éstas vienen a ser las mayores objeciones que pueden hacerse de un sistema jurídico que trata, en primer lugar, de beneficiar al cónyuge de buena fe y sancionar, por el contrario, al que con mala fe produce el contrato matrimonial con engaño del otro cónyuge. La autora, en unas denominadas «Conclusiones antecodiciales» (cfr. pp. 105-126), independientemente de las propias sugerencias y consideraciones que ha venido haciendo al hilo de la exposición de la doctrina antigua, formula muy acertadamente, a manera de síntesis, de muy buen sabor jurídico, su propia doctrina de la que había ido dejando ya huellas sustanciales a lo largo de su precedente exposición.

El Cap. III (pp. 127-236) lo designa bajo la rúbrica «la doctrina codicial». Su contenido hace referencia fundamentalmente al c. 1971, 1, 1.º del Código de 1917, así como a las diversas Respuestas que, desde el año 1929 a 1946, dio la Comisión Pontificia de Intérpretes a las diversas Consultas planteadas con relación a dicho precepto canónico en lo que se refiere concretamente a la inhabilidad del cónyuge causante de la nulidad para plantear como actor esta demanda de nulidad de matrimonio. Gracias al nuevo régimen canónico, que contó como precedente con la célebre Ins-

trucción dada en 1855 para Austria, obra del entonces Cardenal Arzobispo de Viena, queda fundamentalmente sentado y sin fisuras el principio de libertad contractual para el matrimonio canónico. Sin embargo, a juicio de María Luisa Jordán, la prohibición del ejercicio del *ius accusandi* por parte del cónyuge culpable de la nulidad, mantiene un elemento que distorsiona la fuerza del régimen de la nulidad del matrimonio, pudiéndose presentar, al menos externamente, como viciado de un condicionamiento, para el ejercicio de la acción de nulidad, parejo o al menos parecido al de las nulidades relativas. Precisamente, al sentir de la autora, las diversas Respuestas de la Comisión de Interpretes se muestran como reconduciendo el ámbito de la prohibición de la ley a más estrechos límites al perfilar interpretativamente el canon, gracias a unas consultas que evidencian la perplejidad que en un sistema de nulidad absoluta, como es la del matrimonio canónico, producía que uno de los cónyuges no pudiera ejercer la acción de nulidad. Esto explica que la Comisión de Interpretes llegara a responder, el 4 de enero de 1946, que la inhabilidad para la acusación no implicaba la incapacidad *standi in iudicio*, y que la autora se identifique con la doctrina sostenida por Figueroa, de que esta Respuesta de 1946 no se funda ya en la concepción que llama romano-decretalista de la *capacitas standi in iudicio*, sino «en la concepción alemana de la capacidad procesal», distinguiéndose entre capacidad procesal y legitimación procesal, cuyos efectos jurídicos no son siempre coincidentes, pues al significar los términos *habilis ad accusandum* la legitimación procesal, el efecto jurídico de la inobservancia del precepto ca-

nónico no lleva consigo en todo caso la nulidad del proceso, sino que dicho efecto dependerá de cada ley en particular. Por ello, la jurisprudencia rotal no declaró nulidades procesales ya que si el cónyuge culpable «acusa su matrimonio, el acto de la acusación es inválido, pero como tiene *persona standi in iudicio* (res. 4 enero 1946) la sentencia no es nula a tenor del can. 1892, 2.º». En efecto, ese cónyuge culpable conserva su personalidad, es decir, su capacidad jurídica, y también su capacidad procesal, sin embargo —entiende la autora con Figueroa— «únicamente está privado de la legitimación procesal activa en las causas matrimoniales» (cfr. pp. 223-226).

También la autora termina este Capítulo III con unas «Conclusiones finales» de gran interés. Pero deseamos llamar la atención sobre el modo como la autora ha ido exponiendo las Respuestas de la Comisión de Interpretes en un contexto doctrinal que hace ver cómo la Comisión sale al paso o se siente respaldada en sus respuestas de unas posturas de doctrina jurídico-canónica demostrativas de un quehacer científico que avala las soluciones interpretativas que se ofrecen.

Si intentara formular una crítica a la autora la haría recaer en su quizá exagerada posición contra la prohibición de la ley. El problema ha desaparecido en el Código de 1983, y así lo enseña en el Capítulo IV, bajo el Título «La Reforma actual» (pp. 237-244). Pienso, sin embargo, que es legítimo que el legislador, sin necesidad de acudir a ninguna figura analógica penal, sancione en ámbito procesal al autor del dolo o de un fraude prohibiéndole pretender la nulidad que él mismo produjo. Este óbice procesal, que incide en su legitimación, no afecta a la

naturaleza jurídica la nulidad absoluta del contrato matrimonial, confundiéndola con nulidad relativa, puesto que el negocio y sus vicios permanecen en su propia identidad; máxime cuando el Código de 1917 permite la pervivencia del principio Alejandrino con el reconocimiento más claro de la nulidad absoluta mediante la denuncia, que el c. 1971, 2 introduce, reconocida también en su precedente austríaco (cfr. pp. 232 y 233). He de añadir que además no me he dejado de preguntar el por qué la autora ha prescindido del art. 46 de la Instrucción *Provida Mater Ecclesia* de 15 de agosto de 1926. Quizá haya pensado que acudir a este precepto resultaba innecesario después de la Respuesta de la Comisión de Intérpretes de 1946.

Estas objeciones reconozco que carecen de relevancia en un trabajo tan bien urdido, argumentado, con la cita oportuna de autores en cada momento, erudito, que queda como prueba de un bien hacer científico que sólo merece de la estimación admirativa. Precisamente por trabajar la autora tan cuidadosamente un tema que, desde luego, junto a su congruencia jurídica, es tam-

bién un tema vivo, que interesa a la justicia, no puede dejar de preguntarse qué hacer con el autor del dolo al que no se le prohíbe pretender la nulidad matrimonial por él provocada. En su «Conclusión General» (pp. 245-248), intentar trasladar la solución de justicia del *a priori* del proceso de nulidad a su posterioridad; con traslado a su vez jurisdiccional: en los tribunales del Estado podrá plantearse la cuestión de los efectos civiles derivados del matrimonio nulo, imputando al causante de la nulidad las consecuencias que deriven de perjuicio; en rigor, reconoce que nos encontramos ante la temática del matrimonio putativo. Incluso, al final de su obra sugiere la conveniencia de una norma penal como la mejor salvaguardia de la buena fe y la más efectiva y adecuada sanción para quien obró de mala fe.

La obra reseñada de naturaleza procesal, publicada en la Colección Canónica de EUNSA, viene a ofrecer a esta colección, una nota más que añadir a su tarea tan continuada y ya dilatada en el tiempo, de prestigio y calidad científica.

CARMELO DE DIEGO-LORA

M. BONNET-B. DAVID, *Introduction au Droit ecclésial et au nouveau Code*, ed. Les Cahiers du Droit ecclésial, Luçon 1985, 168 págs.

Los autores —que dirigen la revista «Les Cahiers du Droit ecclésial» (cfr. *Ius Canonicum* XXIV, 1984, p. 951)— nos ofrecen ahora una introducción al Derecho de la Iglesia y al Código de la Iglesia latina. Recordando la afirmación de Juan Pablo II: «¡Estudio del Código, escuela del

Concilio!» (Alocución del 21.IX.83), subrayan que sitúan su trabajo en esta perspectiva. Se proponen poner de relieve las conexiones existentes entre la legislación canónica y las enseñanzas conciliares: «se impone una lectura eclesiológica de la disciplina canónica del Código si se quiere respe-